



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

ABOGACÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

S.J.: 234/2025.	Expediente: 171/2025
INFC: 2025/1293.	

Se ha recibido en este Servicio Jurídico expediente de la modificación del contrato de servicios denominado «“GESTIÓN DEL CENTRO DE PRIMERA ACOGIDA CANTUEÑA PARA MENORES MIGRANTES ATENDIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD”», **adjudicado a la entidad “EL CASTILLO GESTIÓN INTEGRAL, S.L.”**, mediante Orden 2823/2024, de 4 de octubre, de la Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, mediante procedimiento abierto; y formalizado mediante contrato de fecha 29 de octubre de 2024, por un plazo de dos años, a partir del 1 de noviembre de 2024, con opción de prórroga por otros dos años.

A la vista de la documentación obrante en el expediente administrativo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.b) de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, se emite el siguiente

INFORME

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO: Mediante Orden 2823/2024, de 4 de octubre, de la Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales se adjudicó por procedimiento abierto el contrato de servicios denominado “GESTIÓN DEL CENTRO DE PRIMERA ACOGIDA CANTUEÑA PARA MENORES MIGRANTES ATENDIDOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD” a favor de la mercantil EL CASTILLO, GESTIÓN INTEGRAL (B42691188) en la cantidad de 10.771.588,86 euros (IVA incluido del 10 % y cuya base imponible era de 9.792.353,24 €), formalizándose el contrato el día 29 de octubre de 2024, por un plazo de dos años a partir del 1 de noviembre de 2024, con opción de prórroga por otros dos años.

El objeto del contrato consiste en la gestión del centro de primera acogida y media estancia La Cantueña, (en adelante CPA Cantueña), para ejercer la guarda en atención inmediata de los menores en edad adolescente, que llegan a la Comunidad de Madrid sin acompañamiento familiar contando actualmente con 96 plazas.

SEGUNDO: De acuerdo con las últimas cifras estimadas se prevé que un número de entre 700 a 800 menores procedentes de Canarias podrían llegar la Comunidad de Madrid para ser acogidos, por lo que se hace necesario que, dispositivos como el Centro de Acogida Cantueña, cuente con plazas libres para brindar atención inmediata a estos menores, así como a los nuevos ingresos que diariamente llegan a la Comunidad de Madrid. Actualmente el nivel de ocupación de la Red de Protección de



ABOGACÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Menores de la Comunidad de Madrid, en lo que se refiere a centros específicos para adolescente, supera el 90%. La previsión de la llegada masiva de menores procedentes de Canarias unido a la alta ocupación de los centros específicos para adolescentes hace necesario la ampliación del número de plazas disponibles en el Centro de Primera Acogida Cantueña, pasando de las 96 actuales a 115 (19 adicionales)

El apartado 22 de la cláusula 1 del capítulo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en adelante, PCAP) que rige el contrato, indica que éste podrá ser objeto de modificación por el órgano de contratación y con carácter obligatorio para el contratista, en las siguientes circunstancias y con las particularidades determinadas a continuación:

1. Incremento o disminución de la capacidad del centro. Condiciones en que podrá efectuarse.

- Cuando se incremente o disminuya la capacidad autorizada del centro, con el límite del 20 % de las plazas iniciales y supeditado, en todo caso, a su viabilidad urbanística y económica.
- Cuando por un aumento o disminución de la demanda, se prevea la necesidad de incorporar nuevas plazas al contrato, podrá modificarse el contrato, aumentando o disminuyendo hasta un 20% las plazas iniciales (hasta 19 plazas adicionales).

El PCAP en el apartado citado establece que para que pueda apreciar un aumento de la demanda a efectos del incrementar la capacidad del centro (1) debe tener durante dos meses consecutivos un **porcentaje promedio de ocupación mensual superior al 90 %**, y además (2) se aprecie **el riesgo de que el número de plazas objeto del contrato puedan no ser suficientes para atender la demanda existente**.

Ambas condiciones se cumplen para poder modificar el contrato ya que la ocupación media supera el 90% en los últimos dos meses y la previsión de la llegada de menores procedentes desde Canarias supone un riesgo de que el número de plazas existente no sea suficiente para la demanda.

Además, con fecha 2 de abril de 2025 se solicitó a la Subdirección General de Calidad e Innovación modificación de la capacidad para el centro de atención social denominado CENTRO DE PRIMERA ACOGIDA CANTUEÑA ubicado en CTRA N-401 (Madrid-Toledo) KM 17,0 SALIDA 17 A-42 POLIGONO LA CANTUEÑA Fuenlabrada 28947 MADRID, y comprobada la aportación de los documentos esenciales, se dio el visto bueno a la ampliación.

En cuanto al cálculo del coste de esta modificación, el PCAP establece en el apartado citado de la cláusula 1 que el importe de la modificación consistirá en multiplicar el número de plazas incrementadas por el precio plaza/día que se obtenga de dividir el precio de adjudicación por el número de plazas anterior a la propuesta de modificación y el número de días de cada año (365 días o 366, en caso de ser el año bisiesto).

El precio de adjudicación de este contrato fue 9.792.353,24 (IVA excluido) y el plazo de ejecución de 2 años, desde el día 1 de noviembre de 2024, hasta el día 31 de octubre de 2026, por lo que el precio plaza día sin IVA a efectos de calcular el importe de la modificación sería de 139,73 euros



ABOGACÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

(9.792.353,24/96 plazas/730 días). Teniendo en cuenta que se estima que la modificación entre en vigor el 1 de agosto de 2025 el importe de esta modificación ascendería a 1.213.275,59 euros (IVA excluido). El porcentaje del precio a que afecta esta modificación sería del 12,39%, estando dentro de los límites establecidos tanto en el PCAP como en la LCSP.

Asimismo, el PCAP establece que cuando se produzca un aumento de las plazas, la dotación de personal del equipo socioeducativo, de apoyo y/o de intervención directa deberá aumentar en la misma proporción que el incremento del número de plazas, respetando siempre la ratio de personal establecida en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

En concreto, para mantener la ratio de atención que establece el PPT de este contrato, el aumento de 19 plazas supondría la incorporación de un equipo profesional formado por:

- 1 Coordinador
- 4 Educadores
- 4 Auxiliares técnicos educativos
- 4 Mediadores
- 2 Auxiliares de servicios generales

TERCERO: Por otra parte, el día 31 de marzo de 2025 se produjo una pelea multitudinaria en el CPA Cantueña que se saldó con 12 menores detenidos, siendo agredidos educadores y personal de vigilancia y seguridad, por lo que se constató una brecha de peligrosidad, lo que requiere necesariamente el refuerzo del servicio de vigilancia y seguridad que se presta actualmente, ya que es un centro de grandes dimensiones, se encuentra con una alta ocupación y principalmente, por el perfil disruptivo de muchos de los menores residentes, que hace muy difícil y peligrosa la convivencia.

Esta circunstancia, **unida al aumento de plazas** que se va a llevar a cabo en el centro conforme a lo expuesto en el apartado anterior, **hace necesario el refuerzo del servicio de vigilancia y seguridad de dicho centro**. Actualmente, el CPA Cantueña cuenta con 3 puestos de vigilancia diaria de 24 horas, por lo que precisa un refuerzo de 2 puestos adicionales de vigilancia 24 horas.

Esta modificación encajaría dentro del segundo supuesto contemplado en el apartado 23 de la cláusula 1 del PCAP que se refiere al aumento o reducción de los medios necesarios para la prestación del servicio, definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Las condiciones en las que se podría hacer uso de esta modificación vendrán determinadas por la evolución de las características de los usuarios y la necesidad de la incorporación de nuevos profesionales para una mejor atención especializada.

La modificación viene determinada para una mejor atención especializada ajustada a las necesidades concretas que resultan de la complejidad de los casos atendidos y de la intensificación de las intervenciones y del funcionamiento integral del recurso.

Según establece el PCAP en el apartado citado anteriormente, el importe de esta modificación se estimará en función de los costes salariales de los puestos incrementados de acuerdo con la categoría profesional del puesto que figure en el convenio aplicable en el momento de la adjudicación del contrato. El importe se verá incrementado con los costes correspondientes de Seguridad Social, el



correspondiente beneficio industrial y en su caso, el IVA.

El personal de seguridad no es personal laboral directo de la mercantil adjudicataria sino que ésta ha subcontratado el servicio; no obstante, de acuerdo con el apartado 23 se permite la subcontratación cuyas prestaciones no estén directamente relacionadas con el objeto del contrato (servicio de limpieza, mantenimiento, manutención/cocina, control de accesos, seguridad y vigilancia), siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP, quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas en el artículo 216 de dicho texto legal. En todo caso, el contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración y de conformidad con el convenio colectivo de aplicación.

Dado que el personal de vigilancia y seguridad no es personal laboral directo de la adjudicataria, para el cálculo de la modificación relativa al servicio de vigilancia y seguridad se ha tomado como referencia el precio establecido en la memoria económica del expediente, que es de 25,95 €/hora para un total de 26.280 horas anuales (52.560 horas para los 24 meses). Este precio debe reducirse en el porcentaje de la bajada de adjudicación ofertada por la empresa (que fue del 9,03 %) que da un resultado de 23,61 €/hora.

Teniendo en cuenta que la entrada en vigor de esta modificación será el 1 de octubre de 2025, se cifran en 10.960 horas el aumento del número horas del servicio de seguridad y vigilancia hasta la finalización del contrato. El importe de esta modificación ascendería a 517.908,96 euros (IVA excluido). El porcentaje del precio a que afecta esta modificación sería del 5,28 %, estando dentro de los límites establecidos tanto en el PCAP como en la LCSP. Estos límites son respetados aun sumando el porcentaje de la modificación del apartado anterior de esta Orden, ascendiendo la suma de ambas al 17,67% del precio del contrato.

CUARTO. Notificada la propuesta de modificación del contrato, el contratista manifiesta su conformidad mediante escrito de fecha 26 de mayo de 2025.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

PRIMERA. - Procede, en primer lugar, subrayar que este informe tiene por objeto dos modificaciones que se pretenden realizar en el contrato señalado:

- a) la correspondiente al aumento de plazas debido al aumento sostenido y constante de la demanda de aquellas.
- b) La correspondiente al aumento de puestos de vigilancia respecto del centros derivados, tanto de la situación actual como de la que se considera pudiera producirse tras el aumento de plazas.

A continuación, debemos determinar el régimen jurídico aplicable al expediente de modificación. A tenor de la **Disposición Transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), apartados 1 y 2:**

“1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se registrarán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En el caso de procedimientos negociados sin publicidad, para determinar el momento de iniciación se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.

2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se registrarán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior”.

Los contratos analizados fueron adjudicados con posterioridad a la entrada en vigor de la citada ley; por tanto, el régimen jurídico aplicable al presente modificado será el previsto en la vigente LCSP/TRLSP consolidado a día de hoy, tras la mencionada modificación especialmente.

Asimismo, y en cuanto no se oponga a lo establecido en dicho texto legal, por el **Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre**, y por el **Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid aprobado por el Decreto 49/2003, de 3 de abril**.

SEGUNDA.- Ya hemos mencionado la cláusula 1.22 del PCAP en el Antecedente de Hecho segundo de este mismo informe. Según la Memoria Justificativa:

“E) PROPUESTA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN.

La Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad propone modificar este contrato para incrementar su número de plazas en 19 plazas adicionales y así, hacer frente parcialmente a esta necesidad de plazas y, por otro lado, se plantea un refuerzo del servicio de vigilancia y seguridad con la incorporación de 2 puestos adicionales a los contemplados en el contrato, durante 24 horas los 365 días del año.

El incremento propuesto respeta el límite del 20 por 100 sobre el total y encuentra amparo en los supuestos de modificación contemplados en el PCAP, tanto en el apartado 22.1 y 2 de la cláusula 1 del capítulo I.

F) JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS PÚBLICO

El Consejo de Estado ha resaltado la importancia de justificar el interés público, afirmando que “la modificación contractual debe hallarse respaldada o legitimada por un interés público claro, patente e indubitado”, de modo que “al concurrir una “razón de interés público” para dicha modificación, habida cuenta de que si se procediese a la resolución del contrato y a una nueva licitación, no se obtendría ninguna ventaja desde el punto de vista técnico...y se incurriría en un gasto superior al que deriva de la modificación del contrato, a consecuencia del aumento de los costes derivado del aplazamiento en el tiempo de la nueva licitación”.

Teniendo en cuenta la situación actual de llegada masiva de menores inmigrantes expuesta en el apartado C de la presente memoria justificativa, el interés público se sustancia, por tanto, en la supremacía del interés del menor, cuyo bienestar debe ser garantizado, ya que estos menores deben ser atendidos de forma inmediata, sin que quepa lista de espera, requiriendo una intervención especializada para su integración en nuestro país y estas 19 plazas y el refuerzo del servicio de vigilancia y seguridad son necesarios para permitir un cierto alivio para esta situación crítica y para la protección de los menores y del equipo profesional que les atiende”.

TERCERA.- En concreto, y conforme a nuestra tradición legislativa, la LCSP contempla en su **artículo 190** entre las prerrogativas de la Administración en la contratación administrativa, la posibilidad de modificar los contratos por razones de interés público.

Más en detalle, desarrolla el **artículo 203** los aspectos esenciales de la potestad de modificación, viniendo a diferenciar entre las causas de modificación contempladas, con indicación de los concretos supuestos en que sea posible, en el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), y las recogidas, en términos muy restrictivos, en la propia ley. Así, señala su **apartado 2** que la modificación del contrato será posible:

«a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204;

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205».

En el caso sometido a informe, sí permitió las modificaciones del contrato en su cláusula 1.22 como ya hemos visto. Según la Memoria justificativa de la presente modificación del contrato:

“Respecto al carácter sustancial de la modificación, hay que señalar que la Jurisprudencia se opone a la introducción de alteraciones profundas en la fase de ejecución de los contratos cuando tales alteraciones puedan lesionar los principios de publicidad y concurrencia, que es lo que se produce siempre que quepa presumir razonablemente que las nuevas condiciones del contrato podrían haber permitido concurrir a licitadores que no lo hicieron o presentar a los que sí concurrieron ofertas distintas, de tal forma que la adjudicación pudiera haber recaído en un adjudicatario distinto.

El Tribunal Europeo (Sentencia Succhi di Frutta) considera que una modificación contractual posterior a la adjudicación es contraria al Derecho Comunitario, a menos que se cumpla alguna de las dos siguientes condiciones:

a) Que la modificación no afecte a ninguna condición esencial de la licitación, entendiéndose que una modificación es esencial cuando no quepa excluir que las condiciones originales, menos favorables, hayan disuadido a otros licitadores a participar en la licitación, o que a la vista de las condiciones actuales podría haber otros licitadores interesados en la licitación, o que la adjudicación hubiera recaído en otro licitador distinto. No se debe olvidar además que el perfil de estos menores hace también muy difícil encontrar entidades que dispongan de equipos formados, estables y debidamente acreditados para atenderlos.

Con esta ampliación de plazas y el refuerzo del servicio de vigilancia y seguridad no se afecta a ninguna condición especial del procedimiento contractual, y se puede prever que se hubieran presentado las mismas entidades que lo hicieron en su momento, o únicamente la adjudicataria, dada la situación actual de incremento de precios, especialmente laborales, de seguridad y de suministros energéticos.

b) Que la posibilidad de efectuar una modificación, así como sus modalidades, esté

prevista de forma clara, precisa e inequívoca en la documentación de la licitación.

Estas condiciones se encuentran claramente expuestas en el PCAP y así, en su apartado a) se prescribe lo siguiente:

“En el caso de incremento de plazas, el importe de la modificación consistirá en multiplicar el número de plazas incrementadas por el precio plaza/día que se obtenga de dividir el precio de adjudicación por el número de plazas anterior a la propuesta de modificación y el número de días de cada año (365 días o 366, en caso de ser el año bisiesto).

Todo ello estará supeditado a la viabilidad urbanística y/o material de reorganización de espacios o ampliación del centro, dado que dichas plazas deberán contar con la habilitación exigida en la normativa vigente en servicios sociales, y en todo caso, se vinculará a la disponibilidad presupuestaria vigente al momento de la modificación”.

El precio/plaza/día de referencia se obtiene al dividir el importe de adjudicación (9.792.353,24 €) entre 96 plazas y 730 días, dando como resultado un importe de 139,73 euros + IVA (10 %), en total, 153,70 euros.

La propuesta de incremento del contrato en 19 plazas supone un aumento del 19,79 por 100 sobre el número total de plazas iniciales (96 plazas) y un incremento anual inferior al 20 % en el precio total de adjudicación del mismo, (1.334.603,15 euros con IVA respecto de los 9.792.353,24 euros sin IVA del período inicial de ejecución), que se sustancia en el 13,63 %, por lo que estaría dentro del límite máximo, que es del 20 %, no resultando afectado el precio unitario ni alterándose de forma sustancial las prestaciones inicialmente pactadas, por lo cual, no se considera una modificación sustancial.

Si se establece el inicio de esta modificación a partir del 1 de agosto 2025, el importe total de la modificación sería el resultante de multiplicar el precio/plaza, obtenido conforme a los criterios del PCAP, por el número de días de aplicación (ascendiendo a un total, desde dicho 1 de agosto de 2025 hasta el 31 de octubre de 2026, de 1.334.603,15€).

(...) Esta modificación conllevará una ampliación de la plantilla de personal debido a que el PCAP señala que Cuando se produzca esta modificación del contrato (aumento o disminución de las plazas), la dotación de personal del equipo socioeducativo, de apoyo y/o de intervención directa deberá aumentar o disminuir en la misma proporción que el incremento o disminución del número de plazas, respetando siempre la ratio de personal establecida en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

(...)

Por lo que se refiere al refuerzo del servicio de vigilancia y seguridad que encajaría en el supuesto 2 de modificación contractual, se establece que el importe de la modificación se estimará en función de los costes salariales del puesto eliminado, incrementado o variado de acuerdo con la categoría profesional del puesto que figure en el convenio aplicable en el momento de la adjudicación del contrato, o en función de la diferencia de retribuciones entre las distintas categorías profesionales que se intercambien, atendiendo a las tablas salariales del IV Convenio Colectivo Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores. El importe se verá incrementado con los costes correspondientes de Seguridad Social, el correspondiente beneficio industrial y en su caso, el IVA, con un límite del 20% del precio del contrato.

El personal de seguridad no es personal laboral directo de la mercantil adjudicataria sino

que ésta ha subcontratado el servicio; no obstante, de acuerdo con el apartado 23 se permite la subcontratación cuyas prestaciones no estén directamente relacionadas con el objeto del contrato (servicio de limpieza, mantenimiento, manutención/cocina, control de accesos, seguridad y vigilancia), siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP, quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidas en el artículo 216 de dicho texto legal. En todo caso, el contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración y de conformidad con el convenio colectivo de aplicación.

Dado que el personal de vigilancia y seguridad no es personal laboral directo de la adjudicataria, para el cálculo de la modificación relativa al servicio de vigilancia y seguridad se ha tomado como referencia el precio establecido en la memoria económica del expediente, que es de 21,45 euros/hora + IVA (25,95 €/hora) para un total de 26.280 horas anuales (52.560 horas para los 24 meses). Este precio debe reducirse en el porcentaje de la bajada de adjudicación ofertada por la empresa (que fue del 9,03 %) que, aplicado al mismo más el IVA del 21 % aplicable a estos servicios, da un resultado de 23,61 €/hora. (La cuantía resultante por este concepto, por el período ya mencionado, es de 569.699,86€).

Esta modificación supone un 5,82 % respecto del importe de adjudicación sin IVA (9.792.353,24 €)”.

Asimismo, desde la perspectiva procedimental remite a lo señalado en el **artículo 203 de la LCSP**.

CUARTA.- Desde el punto de vista procedimental, aspecto en que la **disposición transitoria primera de la LCSP** no deja duda sobre su aplicación al supuesto analizado, se ha seguido la tramitación prevista con carácter general para el ejercicio de las prerrogativas en materia de contratación en su **artículo 191** así como las especialidades contempladas en su **artículo 207**, habiéndose cumplimentado en particular el trámite de audiencia a la contratista adjudicataria, que ha manifestado oposición a la modificación.

Consta en el expediente escrito de fecha 26 de mayo de 2025, por el que el representante legal de la empresa adjudicataria, EL CASTILLO GESTIÓN INTEGRAL, S.L., manifiesta su conformidad, en nombre de la mencionada entidad, con la modificación propuesta.

En cambio, no es necesario en el presente caso, el informe de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid al no cumplirse los presupuestos necesarios para ello de conformidad con el **apartado 3.b) del precitado artículo 191¹**.

En cualquier caso, **deberá atenderse a lo preceptuado en el artículo 203.3²**, en relación con los **artículos 207 a 63**, en lo concerniente a la formalización y publicidad de la modificación.

¹ “será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos y respecto de los contratos que se indican a continuación: Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros”.

² “Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153, y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63”.



ABOGACÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Por lo expuesto procede formular la siguiente

CONCLUSIÓN:

Examinado el expediente de modificación del contrato de mencionado *ut supra*, y teniendo en cuenta la necesidad de atender a los requisitos relativos a formalización y publicidad mencionados, posteriores a la emisión del presente informe, se emite informe favorable a la modificación propuesta por el órgano de contratación.

En Madrid, a fecha de firma

EL LETRADO DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES.

Firmado digitalmente por: DE SANTIAGO FONT MERCEDES GUADALUPE
Fecha: 2025.06.13 12:51

Fdo. Mercedes de Santiago Font.

**DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN. SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA. CONSEJERÍA
DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL.**